



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: ***

ACTOR: ***

AUTORIDADES DEMANDADAS: 1) SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES y 2) INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (AHORA SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

MAGISTRADO PONENTE: ALFONSO ROMÁN QUIROZ

Aguascalientes, Aguascalientes, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de nulidad número ***.

RESULTANDO

I. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado el *catorce de diciembre de dos mil diecisiete*, remitido a esta Sala al día hábil siguiente, *****, demandó de las autoridades al rubro citadas la nulidad del acto administrativo que precisó en los siguientes términos:

“ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA:

1. Se demanda la nulidad de la ilegal determinación del valor catastral por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes del predio ubicado en la *****.

2. La ilegal determinación del impuesto a la propiedad raíz por la cantidad de \$28,299.00 (Veintiocho Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 m.n.) para los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en base a la ilegal determinación del valor catastral, con número de cuenta predial *****.”

II. El *quince de enero de dos mil dieciocho*, se admitió a trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y ordenó emplazar a las autoridades demandadas, requiriéndolas para que exhibieran la resolución impugnada y su notificación.

III. Por acuerdo del *nueve de abril de dos mil dieciocho*, se

recibió la contestación de demanda producida por las demandadas, pronunciándose esta Sala respecto a las pruebas ofrecidas, en términos del propio acuerdo.

IV. Mediante proveído de *veintisiete de junio de dos mil dieciocho*, se recibió ampliación a la demanda inicial de la parte actora.

V. Por auto del *veintiocho de agosto de dos mil dieciocho*, se tuvo a las autoridades demandadas dando contestación a la ampliación de demanda, pronunciándose esta Sala respecto a las pruebas ofrecidas, en términos del mismo acuerdo y se señaló fecha para la audiencia de juicio.

VI. En audiencia de juicio que fue celebrada el *veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho*, se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, se agotó el periodo de alegatos y se citó el asunto para dictar sentencia definitiva, que hoy se pronuncia:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia.

Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, párrafo segundo y 52, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 33-A y 33-F, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado y artículos 1º y 2º, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, en virtud de que se impugnan resoluciones definitivas dictadas por autoridad fiscal del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, que la parte actora afirma, le afecta su esfera jurídica.

SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos impugnados.

Con fundamento en el artículo 60, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes¹, y a fin de fijar con exactitud la cuestión a resolver, se precisa que las resoluciones impugnadas en el presente juicio lo son las

¹ "ARTÍCULO 60.- Las sentencias que dicte la Sala no necesitarán formulismo alguno, pero deberán contener:

I.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;..."



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2254/2017

determinaciones del impuesto a la Propiedad Raíz, relativas a la cuenta predial ***, para lo ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, emitidas por el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes a nombre de la parte actora, cuya existencia se comprueba con:

1.- En relación al ejercicio fiscal 2017, con la resolución determinante del impuesto a la propiedad raíz del *primero de diciembre de dos mil diecisiete*, emitida por el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, prueba que obra de la foja 22 a 26 de los autos por haberse acompañado a la contestación de demanda por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes.

2.- Por lo que hace a los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; su existencia se comprueba con la resolución determinante del impuesto a la propiedad raíz del *catorce de diciembre de dos mil diecisiete*, emitida por el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, prueba que obra de la foja 27 a 43 de los autos por haberse acompañado a la contestación de demanda por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes.

Pruebas que al tratarse de DOCUMENTALES PÚBLICAS, al haberse expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad al artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes por disposición de sus numerales 3º y 47.

Se arriba a la conclusión de que las determinaciones de impuesto a la propiedad raíz descritas son las que se impugnan, porque si bien la demandante, de manera expresa señala como actos impugnados los señalados en el resultando primero de este fallo. Sin embargo, no debe

pasarse por alto lo establecido en el artículo 2º, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes que dispone que el juicio contencioso administrativo procede en contra de resoluciones definitivas, dictadas por cualquiera de las autoridades fiscales del Estado o Municipales, en el entendido que por resolución definitiva debe entenderse a aquella que representa la última voluntad de la autoridad administrativa.²

Por lo que en el caso la parte actora combate —además de las citadas resoluciones definitivas,— diversos actos en los que dice se sustenta la determinación de impuestos anteriormente precisadas, no obstante, dichos actos no pueden tenerse como impugnados, sino que en todo caso su impugnación se da en la medida de que el actor combata el acto definitivo —como sucedió en la especie— por lo que su análisis se realizará en el capítulo correspondiente de los conceptos de nulidad, sin necesidad de tenerlos como actos combatidos con destacada autonomía.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, último párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, se procede al estudio de las causales de improcedencia invocadas por las demandadas, según la fracción I del artículo 26, de la Ley en cita, la que de resultar procedente, provocaría el sobreseimiento del presente juicio, impidiendo el análisis de los conceptos de nulidad expresados por el demandante.

Aducen la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado que la parte actora no tiene **interés legítimo** en el presente juicio porque pretende controvertir el avalúo catastral, siendo que no existe disposición legal que establezca que la legalidad de la determinación del monto del impuesto a la propiedad raíz por parte de la autoridad fiscal municipal, dependa de que el Instituto Catastral dé a conocer de manera oficiosa al propietario del inmueble el avalúo catastral y que por tanto debe declararse el sobreseimiento del presente juicio.

² Al efecto véase la tesis 2a. X/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la novena época, con número de registro 184733, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XVII, febrero de 2003 de rubro: **"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL."**



Lo anterior resulta **INFUNDADO**, ya que para la impugnación de la determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz, así como del avalúo catastral no es necesario acreditar que previamente se hubiere solicitado el mismo conforme al procedimiento administrativo previsto tanto en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para los diversos ejercicios fiscales, como en la Ley de Catastro.

Se afirma ello, porque la parte accionante impugna la determinación del impuesto a la propiedad raíz, así como el avalúo catastral que sirvió de base para calcular el impuesto a la propiedad raíz, lo que resulta procedente conforme al artículo 31, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que permite la impugnación de actos administrativos en aquellos casos en que el particular demandante afirma desconocerlos.

Por lo que el hecho de que no se le hubiere notificado o de que no lo hubiere solicitado previamente a la presentación de su demanda, tan solo constituye una circunstancia que permite al contribuyente impugnar en ampliación de demanda el contenido del avalúo catastral, una vez que la demandada en su contestación eventualmente lo hubiere exhibido; mas no significa que carezca de interés legítimo para controvertir el avalúo catastral dentro del presente juicio al estarse promoviendo la nulidad del Impuesto a la Propiedad Raíz al que le sirvió de base para su cálculo. De ahí que resulte infundada la causal de improcedencia en estudio.

Asimismo, manifiesta que el artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de 2017, establece que como una facilidad administrativa, la autoridad municipal proporcionará un formato oficial a los particulares donde se contenga la determinación de la base del impuesto —valor catastral— así como la cantidad a pagar, una vez aplicada la tasa, por lo que el contribuyente estaba en aptitud de presentar un escrito de inconformidad o en su caso,

solicitar concretamente la aclaración respecto de la emisión del avalúo al Instituto Catastral del Estado y al no haberlo hecho así se acredita la falta de interés jurídico de las resoluciones impugnadas.

Resulta inexacto que deba decretarse el sobreseimiento porque existe falta de interés jurídico y el consentimiento tácito de la parte actora, ya que es optativo para el interesado interponer el recurso administrativo o intentar las vías judiciales correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y 10 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; siendo claro que la parte actora al interponer la demanda de estudio, decidió intentar la segunda de las opciones.

Adicionalmente, si la parte actora manifestó en su demanda el desconocimiento de los actos administrativos impugnados, se presume que el particular no tuvo conocimiento del formato referido en el citado artículo 29 de la Ley de Ingresos, ya que la entrega de éste, es potestativo para la SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, por lo que no necesariamente debe ser entregado a los particulares para que éstos se inconformen en sede administrativa con la determinación de la base del impuesto, esto es, en contra del valor catastral, o bien, soliciten el avalúo catastral ante el Instituto a efecto de verificar si el valor que fuera tomado en cuenta por la autoridad municipal, es el correcto.

Por tanto, la parte actora puede impugnar la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal y del avalúo catastral que constituye su antecedente.

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas Públicas, manifiesta que se actualiza la causal de falta de interés jurídico, porque la parte actora no acreditó ser la titular del bien inmueble cuyo impuesto a la propiedad raíz impugna.

La causal de improcedencia es **INFUNDADA**, porque la parte actora sí acredita la titularidad del bien inmueble cuyo impuesto predial impugna.



Es así porque las resoluciones determinantes de los créditos fiscales, descritas en el SEGUNDO considerando de la presente sentencia, están dirigidas a la parte actora y coinciden con la cuenta predial y ejercicios fiscales impugnados, por lo que es la propia demandada Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, quien reconoce a la parte actora la mencionada titularidad del bien inmueble.

De ahí que no se decrete el sobreseimiento del presente juicio como lo solicita la autoridad demandada.

CUARTO. Al no haberse actualizado causal de improcedencia alguna, se procede el estudio de los conceptos de nulidad expresados por la parte actora; mismos que no se reproducen en obvio de repeticiones; sin que se haga necesaria su transcripción por no ser un requisito formal de las sentencias.

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por las demandadas; sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

QUINTO. Estudio de los conceptos de nulidad en relación con los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

De los argumentos expuestos por la actora, se estudian los señalados como PRIMERO y SEGUNDO del escrito inicial de demanda y PRIMERO de los de ampliación de demanda, ya que de ser fundados son los que mayor protección le brindarían.³

³ Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/9, de la novena época, localizable con número de registro electrónico: 166717, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, cuyo rubro señala: **"CONCEPTOS DE**

Aduce la parte actora en el PRIMER y SEGUNDO conceptos de nulidad del escrito inicial de demanda que la resolución determinante impugnada y los avalúos que sirvieron de sustento a la misma son ilegales, toda vez que son desconocidas por ella, ya que nunca le fueron legalmente notificadas.

Mediante proveído del *quince de enero de dos mil dieciocho*, esta Sala admitió la demanda interpuesta y requirió a las autoridades demandadas para que exhibieran las resoluciones impugnadas.

Al contestar la demanda, la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado, exhibió los avalúos catastrales de la cuenta predial impugnada, correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017, sin embargo, fue omisa en exhibir los avalúos catastrales correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, lo que se acredita con la revisión de las constancias que obran en el expediente y del plan de pruebas ofrecido por la mencionada dependencia, al producir contestación de demanda.

En virtud de lo anterior, resultan FUNDADOS los conceptos de anulación, para los ejercicios fiscales de estudio, toda vez que la autoridad demandada fue omisa en exhibir la resolución determinante del crédito fiscal impugnado, con los avalúos que le sirvieron de base para su cálculo.

Lo anterior es así, porque la autoridad demandada Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, no exhibió la resolución que contenga las razones y fundamentos que justifiquen la determinación del impuesto predial para los ejercicios fiscales de estudio, con los avalúos que le sirvieron de base para la referida determinación que se impugna y ante tal omisión, se concluye que la autoridad fiscal demandada dejó en estado de indefensión a la accionante, esto, porque al no haber exhibido el documento que justifique la determinación del tributo junto con los referidos avalúos, le



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2254/2017

impidió que pudiera formular conceptos de nulidad en ampliación de la demanda, **que ataquen el fondo de dicha resolución.**

Es decir, la demandada hizo nugatorio el derecho de la parte actora de verter conceptos de nulidad en contra del acto que dijo desconocer, por lo que, si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6º de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; lo cierto es que la omisión de la autoridad de exhibir la constancia del acto impugnado, cuando le fueron requeridos por ésta Sala, en virtud de la negativa de la actora, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia **debe darse por sentado que en el fondo**, la autoridad demandada carece de elementos para cobrarle la contribución, por lo que debe entenderse que se contravinieron las disposiciones aplicables o dejaron de aplicarse las debidas, **lo cual constituye una violación de fondo**, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción III de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes y como consecuencia de lo anterior, resultan también nulo el cobro de conceptos accesorios de tal contribución.

En consecuencia, para evitar que la demandante se vea afectado en su esfera jurídica ante la omisión de la autoridad demandada de exhibir las constancias de los actos impugnados, aún cuando tenía la inexorable obligación de hacerlo; lo procedente es que se declare la **NULIDAD LISA Y LLANA** del acto impugnado; haciéndolo innecesario entrar al estudio de los restantes conceptos de anulación, ya que cualquiera que fuera el pronunciamiento que al efecto se resolviera, la parte actora no obtendría un mayor beneficio.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente Tesis 2a./J. 173/2011 (9ª.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Página

2645, Materia Administrativa, que al rubro y texto señala:

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal *el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado*, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que *aquel pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno*, es indudable que no se acredita su existencia, *omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas* por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

SEXTO. Estudio de los conceptos de nulidad en relación al ejercicio fiscal 2017.

De los argumentos expuestos por la actora, se estudian los señalados como PRIMERO y SEGUNDO del escrito inicial de demanda y SEGUNDO de los de ampliación de demanda, ya que al ser fundados son los que mayor protección le brindarían.⁴

Aduce la parte actora en el PRIMER y SEGUNDO concepto de nulidad del escrito inicial de demanda que desconoce la determinación del impuesto para la cuenta predial y ejercicios fiscales impugnados, así como los avalúos que sirvieron de base para ello.

Al contestar la demanda, las demandadas exhibieron la resolución determinante del crédito fiscal relativa a la cuenta predial impugnada respecto al ejercicio fiscal 2017 estudiado en el presente considerando, así como el avalúo catastral que supuestamente sirvió de base para ello.

Expresa la parte actora en el SEGUNDO concepto de

⁴ Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/9, de la novena época, localizable con número de registro electrónico: 166717, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, cuyo rubro señala: ***“CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).”***



nulidad del escrito de ampliación de demanda que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que el **valor catastral** utilizado en la determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes es discordante con el valor catastral establecido en el *avalúo* emitido por el Instituto Catastral.

Son FUNDADOS los conceptos de anulación, toda vez que la demandada Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, no exhibió el *avalúo* que sirvió de base para el cálculo y determinación del impuesto impugnado toda vez que el exhibido no coincide con los valores expresados en su determinación.

Se afirma lo anterior, porque en la determinación del impuesto a la propiedad raíz de fecha *primero de diciembre de dos mil diecisiete*, relativo al ejercicio fiscal 2017, para la cuenta predial impugnada de estudio en el presente considerando, — fojas 22 a 26 del expediente—; se tomaron como base, **montos que no corresponden a los señalados en el *avalúo* catastral correspondiente.**

En efecto, en el *Avalúo Catastral* emitido por la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado (antes Instituto Catastral del Estado) que obra a foja 75 del expediente, se advierte un valor catastral de \$1,601,316.20 (UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 20/100 M.N.), que es distinto al señalado en la determinación del impuesto, ya que en dicha resolución, se advierte un valor catastral en cantidad de \$1,641,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).

Por tanto, el desconocimiento que adujo tener la parte actora, obligaba a las autoridades demandadas a exhibir la resolución determinante del crédito fiscal impugnado —determinación de impuesto a la propiedad raíz **con el *avalúo* catastral que le sirvió de base**— y su constancia de notificación, *sin que el exhibido cumpla con tales extremos por no*

corresponder al valor catastral utilizado para la determinación del impuesto.

Por lo que al ser omisas en adjuntar el avalúo sustento del cálculo del impuesto a la propiedad raíz ejercicio fiscal 2017 para la referida cuenta predial, violaron lo establecido en el artículo 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTÍCULO 31.- Cuando se impugne una negativa ficta, el actor tendrá derecho de ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma.

También podrá ampliar la demanda, cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente, por consentimiento tácito, si el actor considera que la notificación del acto impugnado se practicó de manera ilegal y cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del Artículo 37, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.

Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue de manera ilegal se estará a lo siguiente:

***...
II.- Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución. En este caso al contestar la demanda la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir en ampliación de demanda dentro de los quince días siguientes a aquél en que los conozca; y
...”***

De lo anterior se advierte, que las autoridades demandadas dejaron en estado de indefensión a la parte actora, toda vez que al no exhibir el documento en el que consta el avalúo catastral que sirvió de base para el cálculo de la contribución combatida, impidió al demandante la posibilidad de combatir tal resolución en ampliación de demanda.

Es decir, la demandada hizo nugatorio el derecho de la parte actora de controvertir los actos que dijo desconocer, por lo que, si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6º de la Ley del Procedimiento Administrativo; lo cierto es que la omisión de haber exhibido la correspondiente resolución determinante de impuesto predial y el avalúo



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTE

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2254/2017

catastral por parte de las autoridades demandadas, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia debe darse por sentado que en el fondo, las autoridades demandadas carecen de elementos para determinar los créditos fiscales al contribuyente, lo que se traduce en una *contravención a las disposiciones aplicables u omisión en la aplicación de las debidas*, que actualiza la causa de anulación prevista en la fracción III del artículo 61 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascaliente lo cual constituye una **violación de fondo** que provoca la **nulidad lisa y llana** de estos actos impugnados.

SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de nulidad en relación a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

Manifiesta la parte actora en el SEGUNDO concepto de nulidad del escrito de ampliación de demanda, que los avalúos catastrales exhibidos para los referidos ejercicios fiscales que sirvieron de base para realizar la determinación del impuesto a la propiedad raíz, son ilegales, ya que los mismos **carecen de la debida fundamentación y motivación**, al no señalar las razones con base en las cuales corresponde al inmueble los valores catastrales asignados, limitándose a mencionar que tomó como base las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el Congreso del Estado.

El concepto de nulidad es **FUNDADO**, toda vez que los avalúos catastrales para los ejercicios fiscales de estudio (fojas 71 a 73 de los autos), en los cuales se basó la determinación del impuesto a la propiedad raíz impugnada **carecen de una suficiente motivación**, al no describir la clasificación del bien inmueble y por tanto la asignación de valor, de acuerdo a su antigüedad, tipo y estado de conservación de la construcción.

Es así, porque el artículo 124 BIS del código fiscal del Estado, establece textualmente lo siguiente:

“ARTICULO 124 BIS.- Los actos administrativos que deben ser notificados deberán contener por lo menos los siguientes requisitos:

I.- Constar por escrito.

II.- Señalar la autoridad que lo emite.

III.- Señalar lugar y fecha de emisión.

IV.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, causa, objeto o propósito de que se trate, y

V.- Ostentar la firma autógrafa del funcionario competente que lo emite y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de actos administrativos que consten en documentos digitales y otorguen beneficios al particular, deberán contener la firma electrónica, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Si se trata de actos administrativos que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la carga legal de la responsabilidad.”

De lo transcrito se obtiene que los actos fiscales que deban ser notificados a los particulares, deberán contener como requisito de validez, el estar fundado y motivado, siendo que para los ejercicios fiscales analizados, **no se cumple con el requisito de debida motivación, toda vez que la expuesta es insuficiente.**

Ello resulta así, porque las Tablas de Valores Unitarios, publicadas como anexo de las Leyes de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, establecen **diferentes rangos de valuación, de acuerdo a las condiciones de los inmuebles**, distinguiendo rangos de acuerdo a la antigüedad del inmueble (0 a 10 años, 10 a 20 años o más de 20 años), al tipo de construcción (Alta, Media Alta, Media Baja, Interés Social), y al estado de conservación (Bueno o Malo); parámetros de valuación que **no se señalan en los avalúos de estudio.**

Si bien los referidos avalúos, hacen un análisis y manifiestan que el bien inmueble a valuar es urbano y expresa la superficie del terreno y de la construcción, así como el valor unitario de terreno y construcción y el valor resultante de cada uno de ellos, para luego exponer el avalúo catastral del inmueble, **no obstante ello, resulta insuficiente**, pues para su debida motivación, el avalúo debió expresar los **criterios de clasificación que se tomaron para el inmueble**, en relación a la antigüedad del mismo, su tipo de construcción y estado de



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTE

SALA ADMINISTRATIVA

conservación, en términos de las referidas Tablas Unitarias de Valores Unitarios, y al no haberlo hecho así, se omitieron las formalidades que legalmente debieron revestir, repercutiendo dicha falta de formalidad en la determinación impugnada para los ejercicios fiscales de estudio, con lo cual se dejó en estado de indefensión a la parte actora, actualizándose con ello la causal de anulación a que se refiere el artículo 61, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 162826, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Materia(s): Común, Tesis: IV 2o.C. J/12, cuyo rubro y texto establece lo siguiente:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.
ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA
DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA
INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE
AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA.***

Al atender un motivo de desacuerdo relacionado con la fundamentación y motivación, para producir una respuesta congruente debe, del contexto integral de la argumentación del inconforme, advertirse si lo que se imputa es ausencia de aquella, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer hipótesis bastará observar si la resolución contiene o no argumentos apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de declarar fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En cambio, en el segundo supuesto, cuando la fundamentación y motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo, expresados para explicar por qué la invocación de preceptos legales se estima errónea, o por qué la motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la inconformidad.”

Asimismo, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 174228, Tomo XXIV, Septiembre de

2006, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A.71 K, cuyo rubro y texto establece lo siguiente:

“MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO.

La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que respalda y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) *motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse* o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa; y 3) *indebida motivación, que acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente.*” (Los resaltes son de esta Sala)

OCTAVO. En razón del análisis a que se refieren los considerandos que anteceden, lo procedente es declarar la NULIDAD LISA Y LLANA, de las determinaciones del impuesto a la Propiedad Raíz, relativas a la cuenta predial ***, para los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, emitidas por el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes.

Por las razones que se informan en el presente fallo y con fundamento en los artículos 59, 60, 61, fracción III y 62, fracción II de la



Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Es procedente la acción ejercida por la actora.

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de las determinaciones del impuesto a la Propiedad Raíz, relativas a la cuenta predial ***, para lo ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

TERCERO.- Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman en unión de la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, quien autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos de primero de octubre de dos mil dieciocho. Conste

A continuación se estampan las firmas de los magistrados, así como de la secretaria general de acuerdos, quien a su vez,

CERTIFICA

Que las anteriores copias concuerdan fielmente con su original que obran en el expediente número ***, las que se autorizan para notificar a las partes. Va en *diecisiete páginas*, a veintiocho de septiembre de los mil dieciocho. Doy fe

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES